

Santiago, uno de julio de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, en los antecedentes RUC 1.800.375.839-3, RIT 69-2021, condenó a John Andrés Padilla Padilla, a la pena de once años de presidio mayor en su grado medio, y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor del delito consumado de homicidio simple, cometido en esta jurisdicción el día 16 de abril de 2018, en la persona de Roberto Vergara Tolosa.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado recurrió de nulidad, arbitrio que fue conocido en la audiencia pública de trece de junio pasado, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de nulidad se cimenta de forma principal en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal, fundado en que, en concepto de la defensa, el actuar policial, debidamente dirigido por el ente persecutor, no se ajustó al debido proceso en lo que dice relación con la obtención del medio de prueba denominado testigo número uno. Explica que tal testigo, cuya identidad se mantuvo en reserva, ni siquiera pudo declarar en profundidad para no revelar su domicilio.

En razón de lo anterior, denuncia que la defensa se vio impedida de controlar y controvertir sus dichos, ya que, como explica, los registros fotográficos que fueron incorporados al juicio oral dieron cuenta que, cercano al puente donde



se supone que el testigo vio al acusado no existe domicilio alguno, por lo que —en su concepto— no podría haber visto lo que dijo haber observado desde algún inmueble, como el tribunal *a quo* dio por acreditado y no cuestionó, valorando de esa forma su testimonio con vulneración de la garantía del debido proceso, por que solicita invalidar el juicio oral y la sentencia, disponiéndose la realización de un nuevo juicio oral, excluyéndose del auto de apertura el testigo protegido número uno y limitando el testimonio de los demás testigos respecto de dicho testigo excluido.

Segundo: Que, de manera subsidiaria, se dedujo el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374, letra e) del Código Procesal Penal, en relación a lo prescrito en los artículos 342, letra c) y artículo 297 del citado cuerpo legal.

Denuncia que los sentenciadores omitieron el deber de fundamentación exigido en el código adjetivo, pues la decisión de condena se fundó, de manera principal, en el relato entregado por el denominado testigo protegido número uno, quien bajo el fundamento de protección a su persona fue presentado por el ente persecutor como un testigo “sin rostro” “ni domicilio conocido”. Agrega que, en ninguna parte la sentencia concluyó que el tribunal tuvo a su vista el domicilio del testigo protegido número uno y que, dicho inmueble resultó coincidente con otro que estuviera cercano al ya referido puente peatonal.

Afirma que diversos antecedentes no fueron valorados suficientemente por el tribunal *a quo*, especialmente el hecho de que el señor Fiscal de la causa catalogó en su investigación como sospechosos y partícipes del homicidio de Roberto Vergara a Julieta Ibacache y su hijo Johan Tapia, elementos que sostiene serían suficientes para crear en el tribunal una duda razonable en orden a que el “Yoni” de la población Oscar Bonilla correspondía, precisamente, a la persona de su defendido, sino más bien, resulta del todo lógico que hubiese sido Johan Michel



Tapia Ibacache, quien es hijo de la mujer que estuvo en el sitio del suceso, respecto de quien no se probó que tenía relación alguna con su defendido.

En base a lo anterior es que pide anular, tanto el juicio oral como la sentencia, restableciendo la causa al estado de realizarse un nuevo juicio oral, por jueces no inhabilitados.

Tercero: Que, la sentencia impugnada, en su motivo décimo, tuvo por acreditado que, *“...el día 16 de abril de 2018, aproximadamente las 03.00 horas, en circunstancias que Roberto David Vergara Toloza, se encontraba en el sector de la Población Oscar Bonilla, comuna de Rancagua, fue agredido en la cara por un sujeto con quien mantenía una discusión y, posteriormente, éste, premunido de un arma de fuego le al cuerpo (sic), lesionándolo en la región abdominal y ocasionándole la muerte”*.

Lo anterior fue calificado por los sentenciadores como constitutivo del delito de homicidio simple, injusto penal previsto y sancionado en el artículo 391, N° 2 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.

Ahora, en relación a los puntos abordados en el recurso de nulidad, el fallo señaló en la motivación sexta que, *“...corresponde ahora analizar la credibilidad del testigo protegido 1, cualidad que fue puesta en tela de juicio por la defensa penal del acusado, señalando que éste apareció en empadronamientos muy posteriores al hecho y que se contradijo en sus dichos durante la declaración prestada en estrados. En el mismo sentido, acusó que se trató de un declarante absolutamente anónimo para él y para todos, ya que incluso se desconocen hasta la fecha las iniciales de sus nombres y apellidos, cuestión que —afirmó— le hizo complejo poder realizar una buena defensa técnica a propósito de su contraexamen, precisamente por desconocer de quién se trataba.*



Pues bien, lo primero que debe tenerse en cuenta para abordar las alegaciones vertidas por la defensa penal privada de cara a este declarante, es que, en términos generales, el ordenamiento jurídico se ha encargado de proteger a las víctimas y testigos mediante la normativa procesal penal respectiva, porque comprende la importancia de contar con su participación y concurrencia a juicio para obtener información que le permita a sus tribunales en lo criminal formar o no convicción respecto de la ocurrencia de un ilícito penal y de sus partícipes. Entre las medidas que se permiten, se encuentra la reserva de su identidad y demás antecedentes personales que contribuyan a dar con ésta, como, por ejemplo, al impedir que se conozca su domicilio. Incluso más, en algunos casos, como contempla en materia de tráfico de drogas la Ley 20.000, se faculta al personal policial para recibir y utilizar como antecedente indiciario o primera noticia criminal denuncias anónimas con la finalidad de favorecer que la población avise a la policía acerca de quienes suministran sustancias ilícitas, ya que, de lo contrario, los habitantes de las mismas poblaciones en que se vende y tranza droga, que son en definitiva quienes realmente conocen lo que ocurre y sus responsables, jamás contribuirían con antecedentes por sentir un justo y razonable temor de las represalias de las que podrían ser objeto por las bandas que se han adueñado de cada sector.

De modo tal que, en principio, por encontrarse expresamente permitido por el ordenamiento jurídico, la reserva de identidad de testigos y víctimas no podría ser alegada como único fundamento para cuestionar su credibilidad. Tal como apreció esta sala fue enarbolado por la defensa penal privada. Ello, por cuanto un profesional que sostiene la defensa siempre contará con la copia de la carpeta investigativa del fiscal, o debiera hacerlo, y con la declaración prestada por éstos ante funcionarios de la policía por delegación del fiscal, o directamente ante el



Ministerio Público, material que en definitiva constituye lo que deberá controlar y contrastar para realizar una buena defensa técnica. Por lo demás, también dispondrá de un espacio durante su contra examen para indagar lo que estime pertinente a fin de corroborar la fiabilidad de los mencionados declarantes y conocer sus motivaciones para comparecer a juicio, tal como lo realizó el abogado Valdenegro durante la audiencia, ya que tuvo oportunidad de consultar al testigo protegido 1, por ejemplo, si conocía a Cunele, un traficante conocido de la población, si mantenía alguna relación con éste, o bien, quién lo había ofrecido como testigo a los carabineros, o cómo llegaron estos a él, o por qué no conversó ni aportó los antecedentes que tenía con anterioridad a la fecha en que lo hizo si fue testigo presencial del injusto. Bajo la mirada de esta sala, el profesional que sostuvo la defensa privada del acusado contó con la oportunidad para examinar la credibilidad del declarante que cuestionó, tanto es así, que mediante su contraexamen resultó de manifiesto que el referido se contradijo en aspectos esenciales, como en la circunstancia de si vio no disparar al acusado en contra del sujeto que fue muerto, circunstancia que, en este caso, debe ser la que funde su cuestionamiento y que se pasará a examinar.

Sin perjuicio de lo expuesto, es dable hacer presente que si el abogado alberga alguna duda o tiene noticia actual o futura de alguna eventual falta de prolijidad en el procedimiento administrativo que debiera seguirse para los casos en que existan testigos protegidos o reservados, y por el cual el Ministerio Público debiera remitir al Juzgado de Garantía, en sobre cerrado, la nómina de testigos reservados, debidamente individualizados, documento que debiera ser remitido en su oportunidad al Tribunal de Juicio Oral Penal que deberá conocer la causa, para el conocimiento de los mismos y el diligenciamiento de sus notificaciones, cualquiera sea la parte del eslabón en que dicho procedimiento se encontrare



eventualmente fallando, debe reclamarlo y hacerlo ver derechamente al organismo respectivo para que dicha situación se corrija y se tomen, a la brevedad, las medidas del caso, a fin de evitar cualquier circunstancia, espacio o posibilidad que permita que este hecho pueda ser mal utilizado o se preste para confusiones, arbitrariedades o abusos.

Sigamos. Continuando con el examen de las alegaciones de la defensa penal privada del acusado, que cuestionó la credibilidad del testigo protegido 1, fundado en que su tardía aparición en los empadronamientos podría deberse a un interés de perjudicar a su defendido por algún eventual vínculo con otros traficantes del sector, lo cierto es que tal premisa, además de ser esbozada, no encontró sustento, o bien, la posibilidad de poder serlo, en los antecedentes que se recabaron durante el juicio.

Bajo la perspectiva de esta sala, no parece tan extraño que uno de los habitantes de la población en la que se produjo el asesinato, se haya restado de manera voluntaria para involucrarse en este asunto. Más aún si, como adujo en estrados, había prestado declaración en otro caso judicial y fue amenazado y acosado en dicha oportunidad por quienes estimaron encontrar que los perjudicaba. Al argumento comentado, cabe agregar que conforma un hecho público y notorio que la población Óscar Bonilla de esta ciudad se trata de un sector en el que debe circularse con precaución y cuidado, como en tantos otros sectores de Rancagua. Así se ha escuchado por estos magistrados de boca del personal policial para muchos otros casos que tuvieron como escenario dicho sitio. Luego, corroborando esta premisa, se pudo escuchar cómo el padre del occiso comentó, al pasar, durante su declaración, que la mañana en la que él concurrió, solo, a la población Óscar Bonilla para averiguar qué había pasado con su hijo o encontrar a alguno de sus amigos para conversar, se le acercó una



vecina que le dijo que mejor se fuera, que nadie lo conocía en ese lugar, que además estaba solo y que era un sector peligroso, más aún si se relacionaba con lo que se había producido allí.

De modo tal que esta sala pudo comprender las razones que mantenía este declarante para tardar, mantenerse al margen, incluso más, cabe la posibilidad de que jamás haya sido encontrado y, claro está, no habría surgido este antecedente. Por otra parte, la pregunta que cabe realizar para esta alegación del profesional es existe realmente un tiempo particular en el que deba encontrarse a los testigos. O, acaso es más certero o fiable aquél que aparece el día de ocurrencia del hecho punible que tres años después. Porque claramente uno será más útil que otro desde una perspectiva del plazo de investigación y término del procedimiento con el juicio respectivo. Pero realmente puede postularse que el primero es más verosímil que el segundo solo por haber surgido tiempo después. ¿Y cuánto tiempo después? Porque el testigo protegido 1 fue empadronado por diligencias que se realizaban tres meses después del hecho, un lapso que bajo la mirada de esta sala es razonable para encontrar personas que decidan arriesgarse a señalar lo que vieron acerca de un asesinato que se cometió a cuerdas del sector donde viven con sus familias.

A decir verdad, este tribunal no pudo más desestimar la alegación formulada por la defensa penal que calificó como una aparición muy posterior o tardía del testigo protegido 1, como fundamento para controvertir su credibilidad, toda vez que consideró existen razones de peso que sin duda contribuyeron con su decisión de mantenerse al margen, por un tiempo al menos.

En efecto, el declarante señaló tajantemente en estrados que no conversó con nadie el día del hecho. Que no conversó con carabineros en esa oportunidad. Que, en definitiva, no conversa con nadie en el lugar donde vive. Acto seguido,



explicó que los carabineros pasaron por varias casas hasta que llegaron a la suya, lo que motivó finalmente a que diera su versión en la unidad policial. Las justificaciones expuestas por el testigo impresionaron a esta sala como coherentes y razonables, bajo el escenario de un poblador de un sector complejo que probablemente se ve expuesto con cierta regularidad a observar o captar hechos ilícitos, que está inserto en esa comunidad y claramente reacio a involucrarse nuevamente en un procedimiento policial, especialmente por un delito tan grave como es un homicidio, ya que antes lo hizo y no lo pasó bien y porque, sabe, se pone en riesgo él y a su familia.

Luego, avanzando en el mismo sentido, pero en otro orden de ideas, este estrado desestimó la alegación tendiente a levantar duda acerca del citado declarante, por un eventual interés de perjudicar al acusado por mantener eventualmente relaciones con otros traficantes del sector.

A decir verdad, y tal como todas las personas que habitan en la población Óscar Bonilla, el testigo, en efecto, conocía -o tal vez resulte más exacto conjugar otro verbo y decir ubicaba- no solo a Julieta o Julie Ibacache, a Johny Padilla o a un tal Cunele por el que fue consultado por el profesional, ello, por cuanto son personas peligrosas de la población en la que habitan. Sin embargo, deducir -como postuló la defensa penal del acusado- que por esta razón el testigo protegido 1 mantiene necesariamente un vínculo con ellos y se presentó a juicio para perjudicar a su representado, impresionó a esta magistratura como un razonamiento deductivo que omite algunos eslabones o indicios en la cadena argumentativa para ver la luz.

Lo que sí compartió este estrado con el profesional, es que el testigo protegido 1 se contradijo en audiencia. Al fiscal aportó información de la cual se desdijo al ser contrainterrogado por la defensa penal. Primero, señaló que vio a



Johnny disparar en contra de un tercer sujeto. Luego, a la defensa le indicó que no lo vio disparar, sino sólo en el lugar con un arma de fuego en sus manos. Asimismo, el declarante señaló en estrados una versión un tanto diferente a la dinámica -bastante más completa- que constaba en su declaración policial, la cual fue introducida a juicio, en algunas de sus partes, por la propia defensa penal para aclarar o evidenciar contradicción con su versión en estrados.

Convenida y establecida esta circunstancia, lo primero que debe tenerse en cuenta para el presente análisis, es que, en términos generales, la practica judicial permite a estos jueces concluir que los testigos que comparecen a juicio, en ocasiones, aportan más información que la primigenia entregada durante sus declaraciones en sede policial, porque el paso del tiempo los tranquiliza y les permite recordar detalles que antes no habrían podido aportar, o bien, se advierte que derechamente no dicen totalmente la verdad. Y esto se produce no porque tengan la intención de cometer el delito de perjurio, sino porque muchas veces proporcionan información de la que no están seguros, ya que -como se mencionó- sus recuerdos se ven afectados por el paso del tiempo, o también, como se ha visto, sucede que se retractan de la información que señalaron en su oportunidad por motivos sentimentales, como en los casos en que deben declarar acerca de familiares o parejas que se ven envueltas en hechos típicos, o derechamente existe otro grupo que cambian su versión al verse enfrentados al juicio propiamente tal. Y la razón es que sienten temor. Porque no es lo mismo narrar lo que se observó al momento de prestar declaración al interior de un recinto policial o en dependencias de la fiscalía, a cuando debe acudir a un tribunal, a la vista de un sujeto que sabe y estima peligroso y al que se va a inculpar. Todo ello, por muy caracterizado que se encuentre el declarante.



De modo tal que, durante la labor jurisdiccional, los jueces han aprendido que las personas no dicen completamente la verdad, ni mienten absolutamente, atendido a los fundamentos que fueron razonados y que motivan las faltas de consistencias o contradicciones que presentan, de lo que fluye que no podría concluirse ex ante que los dichos de un declarante son completamente falaces. Luego, corresponderá al tribunal, en esta etapa de la valoración de la prueba, determinar en cada caso la circunstancia descrita, esto es, la verosimilitud o no de un reporte.

Retomando el hilo conductor del examen del testigo, y como se ha venido señalando, el sujeto habita una población que puede considerarse como peligrosa y en la que con cierta frecuencia puede advertir conductas prohibidas por la ley, por ejemplo, transacciones y venta de droga en las esquinas. A lo anterior debe añadirse que el testigo protegido 1 explicó que tuvo una experiencia anterior en la que fue testigo de un delito, fue aportado como declarante y sufrió amenazas y hostigamientos por ello, de modo tal que resulta esperable que se haya restado de involucrarse en este procedimiento y que, incluso, durante el juicio se aprecie reacio u hostil para proporcionar información, o que la cambie. Tal como fue evidenciado por la defensa penal del acusado. De modo que, a juicio de este estrado, existiendo razones de peso que permiten comprender la actitud desplegada por el ponente en estrados, justificadas en un justo temor, es que no parece extraño que éste haya sido hallado dos meses después de la ocurrencia del hecho, durante labores de empadronamiento que los policías seguían realizando en el sector que sirvió de sitio del suceso, atendido que aún se encontraba pendiente el plazo de investigación, y todavía no había personas detenidas bajo sospecha de autoría.



Cabe señalar además, que la versión aportada por el testigo protegido 1 fue incorporada, con mayor o menor detalle, por las versiones de oídas que proporcionaron los funcionarios Rojas y Mora, corroborándose de este modo las otras partes de los dichos del testigo que fueron aportadas en estrados y que, además, el contenido de su declaración policial fue reproducida en varias de sus partes por la propia defensa penal al realizar los ejercicios que evacuó durante el contraexamen, ingresando con esto a juicio, permitiendo a este estrado refrendar lo que los funcionarios indicaron en juicio, verificándose con ello la consistencia y concordancia de los dichos que prestó ante carabineros, con los reportes de oídas de su declaración entregadas por los policías.

Consideradas, así las cosas, las faltas de consistencia en las que cayó el declarante durante su comparecencia judicial, fueron desestimadas al considerarse justificadas e insuficientes para restar valor de verosimilitud a sus dichos, atendido el trasfondo en el que éste se encontraba y la armonía que su relato presentó tras el cotejo de la información que aportaron los demás testigos de cargo y el resto de la prueba, las que -a modo ejemplar- podrían mencionarse como coincidencias en cuanto al lugar preciso de ocurrencia, la ubicación de las calles, la dinámica en que se produjo la agresión, las voces masculina y femenina que de las que dieron JVH y EVL, a las cuales éste puso nombre o apodo, la circunstancia de haber visto en el lugar un arma de fuego, los disparos, el sujeto correr, etcétera.

En síntesis, bajo la mirada de esta magistratura, el testigo protegido 1, precisamente por presentar las faltas de concordancia que se evidenciaron, en el punto en que se expresaron, es que permitieron a esta sala asegurarse de que carecía de una motivación particular para perjudicar al acusado y se trataba más bien de un poblador de la villa reseñada que, en el momento en que debió decir lo



que realmente vio, se retractó. Si se hubiere tratado de un peón de alguna banda de narcotraficantes, no habría sentido temor y habría hablado sin titubear.

De modo que, así expresadas las cosas, esta sala consideró al declarante cuestionado si bien hostil, pero no por ello poco fiable, quien contribuyó con información que fue estimada como verosímil tras ser corroborada por cotejo con los demás elementos de cargo, siendo incluido su reporte de cara al análisis del hecho típico y la participación del imputado. Más si dicha imputación fue corroborada por otra testigo”.

Cuarto: Que, incumbe analizar, en primer lugar, la causal principal de invalidación propuesta por la defensa de Padilla Padilla, en relación con el reproche efectuado al haberse valorado la declaración de un testigo bajo reserva de identidad y si con ello se vulneró alguna garantía fundamental, en especial el debido proceso y el derecho a la defensa.

Quinto: Que, al respecto, esta Corte ya ha señalado que es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República, el que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, y el artículo 19, N° 3°, inciso sexto de la Carta Fundamental, confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. En torno a los tópicos que contempla el derecho al debido proceso, este tribunal ha sostenido que a lo menos lo constituye un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes que entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que se dicten veredictos motivados o fundados, etcétera. Así, entonces, no hay discrepancias en



aceptar que sin duda el derecho al debido proceso está integrado por la obligación de respetar los procedimientos fijados en la ley, desde que en todo proceso penal aparece comprometido el interés público de la comunidad en el esclarecimiento de los sucesos y el castigo de los delitos, como también la absolución del inocente de acuerdo a una serie de actos de carácter formal y preestablecidos, que den garantías del respeto de la presunción de inocencia, la independencia del tribunal, la igualdad entre las partes y la protección de los intereses del afectado. Este interés debe ser tutelado por el Ministerio Público como órgano predispuesto por el Estado precisamente con ese propósito, que incluye por cierto la promoción de la acción penal y la carga de probar la culpabilidad del inculcado, al mismo tiempo que el tribunal debe actuar con neutralidad y objetividad, de manera que no abandone su posición equidistante de las partes y desinteresada respecto del objeto de la causa.

Sexto: Que, por otra parte, los elementos del debido proceso también han sido desarrollados mediante la incorporación al procedimiento de una serie de resguardos tendientes a garantizar que el imputado goce, desde el momento en que se le atribuya participación en un hecho punible, de una serie de derechos que materialicen el respeto de la presunción de inocencia que lo ampara y la igualdad de armas, entre los cuales se encuentra el ser oído, que supone el derecho a conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que los fundan para ejercer adecuadamente su derecho a defenderse de todos los hechos y circunstancias que se le imputan y formular los planteamientos y alegaciones que convengan a su defensa, el derecho a controlar y controvertir la prueba de cargo, a probar los hechos que él invoca, y la prohibición de ser sancionado por presupuestos diversos de los contenidos en la



formalización y en la acusación, aspectos —entre otros— que han sido consagrados en los artículos 8, 93, 229, 259, 270 y 341 del código adjetivo.

Séptimo: Que en relación al agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte ha resuelto uniformemente que su agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrase, límite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento (entre otras, SCS N°s 2.866-2013; 4.909-2013; 21.408-2014; 4.269-2019; 76.689-2020; 92.059-2020; y, 112.392-2020).

Que, en este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal.

Octavo: Que, en particular, en relación al reproche efectuado por la defensa, es del caso subrayar, que tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema frente a presentaciones similares, las argumentaciones formuladas por las asesorías letradas, tienen el carácter de genéricas, esto es, dicen relación con criterios predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello este planteamiento que se hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos



ocupa. En este aspecto, lo único concreto que alega la defensa es que el solo hecho de haber permitido la declaración de un testigo reservado, en el juicio oral vulnera el debido proceso al cuestionar la forma en la cual el testimonio fue valorado, reprochando un control del contenido de su testimonio, sin precisar acabadamente como aquello habría determinado la decisión de condenar al acusado atendida su trascendencia y entidad, en especial si se considera lo expresado por otros testigos, que lo sindicaron como el autor de los hechos en base al relato, entre otros, de la víctima.

Como se ve, la declaración del testigo reservado N° 1 prestada en el juicio oral y los relatos conocidos del testigo reservado por lo expresado por los funcionarios policiales, no son más que medios de prueba adicionales a lo aseverado en el juicio por esos funcionarios policiales, testigos y peritos, los que dieron cuenta de todo lo sucedido y la identificación del acusado como quien causó la muerte a la víctima. De este modo, la impugnación carece de significación, por cuanto dicho elemento de juicio no contribuyó a la formación de convicción en un sentido determinante, pues a ello se podía arribar con las declaraciones de los otros testigos y peritos que depusieron en el juicio.

Por ello, aun cuando los sentenciadores hubieren considerado esa prueba, su ingreso a los elementos que el tribunal debió valorar para la decisión de lo debatido careció de la capacidad específica que se le atribuye, lo que impide que tal yerro, tenga la trascendencia y entidad que es indispensable para admitir la configuración de la causal de nulidad alegada.

Noveno: Que, sin perjuicio de que las razones expresadas precedentemente son suficientes para determinar la suerte de la causal principal del recurso en estudio, cabe reiterar que la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de primer



fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373, letra a) del Código Procesal Penal. Por ello, resulta indispensable tener en cuenta que, sin perjuicio de las efectivas restricciones a los derechos que el ordenamiento jurídico constitucional reconoce a los acusados mediante el recurso a herramientas procesales como la cuestionada en el caso que se revisa, el instituto de los testigos protegidos o con reserva de identidad se encuentra reglamentado en los artículos 307 y 308 del Código Procesal Penal, permitiendo la adopción de las medidas que las normas citadas contemplan “en casos graves y calificados...” por “...el tiempo razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario”, normativa que tiene su correlato en cuerpos penales especiales como la Ley 18.314, en su artículo 15 y siguientes; o la Ley 20.000, en los artículos 30 a 35 y no se encuentra restringida sólo a la época de la investigación, sino que también puede extenderse a sus fases posteriores e incluso hasta después de su término, todo ello como expresión de la obligación del Ministerio Público —Estado— de proteger a víctimas y testigos.

Así, entonces, admitida por el ordenamiento jurídico la posible colisión entre el derecho a la protección de testigos y el de la defensa, lo relevante a efectos de desentrañar una efectiva conculcación de los derechos de los acusados radica en las motivaciones para conceder la protección solicitada. Sin embargo, tanto las circunstancias fácticas que hicieron procedente la mantención de la medida cuestionada, así como alguna observación respecto del contenido de su declaración e indagar sobre sus motivaciones, se refieren a aspectos que requieren de prueba y la defensa no la ofreció, de manera que esta Corte no se encuentra en situación de emitir un juicio al respecto, ya que la falta de



acreditación de los presupuestos sobre los que descansa la denuncia obstaculizan dar mayor análisis a esta causal.

Décimo: Que entonces cabe concluir que la infracción a las garantías constitucionales invocadas, no se subsume en los hechos que expone el recurrente, pues de los fundamentos del recurso no se divisa ni en el procedimiento ni en la actuación del tribunal maniobra o resolución que haya privado a la defensa del acusado, de la tutela de los derechos que la ley y la Constitución Política de la República le reconoce.

Undécimo: Que, en lo que respecta al motivo absoluto de invalidación propuesto a título subsidiario, esta Corte ya ha manifestado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable. El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N°s 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020; y, 14.491-2021, de 13 de abril de 2021).

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales. Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales



no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera —y no de otra—, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a la concepción racionalista o cognoscitivista, que entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles (Cortés-Monroy, Jorge. La “valoración negativa” como exclusión de la prueba ilícita en el juicio oral, en Revista Ius et Praxis, vol. 24, N° 1, 2018, p. 663).

Duodécimo: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieron por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del código adjetivo. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, único o plural, por los cuales se dieron por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Décimotercero: Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa. En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido como de la conducta desplegada por el acusado.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del



Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto del delito pesquisado, fundada en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que solo resta concluir que las impugnaciones formuladas por la defensa da cuenta de una mera discrepancia con las conclusiones referidas a la forma de atribuir participación al acusado, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de las motivaciones novena, undécima y duodécima de la sentencia, por lo que las imputaciones relativas a una presunta falencia en el razonamiento y a la falta de fundamentación no serán admitidas.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 letra a), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado John Andrés Padilla Padilla, contra la sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua y el juicio oral que le antecedió en la causa RUC 1.800.375.839-3, RUC 69-2021, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

N° 2.962-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y Sra. María Teresa Letelier R. No firma el Ministro Sr. Llanos, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con feriado legal.





En Santiago, a uno de julio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

